

VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN RELACIÓN CON EL AMPARO EN REVISIÓN 208/2016

En el asunto citado al rubro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba llamada a determinar si el primer párrafo del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal resulta inconstitucional al vulnerar el derecho a la vida privada y familiar, en la vertiente del derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos.

En sesión celebrada el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por mayoría de tres votos, modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo a los quejosos para el efecto de que el Registro Civil expida nuevas actas de nacimiento para sus hijas con el orden de apellidos deseado, esto es, el apellido paterno de la madre primero y el apellido paterno del padre después.

Formulo el presente voto a fin de explicar las razones por las cuales, si bien comparto el sentido y la mayoría de las consideraciones que sustentan la resolución, me separo de algunos razonamientos en ella expuestos.

En efecto, si bien coincido en la identificación del derecho humano que está en juego —derecho al nombre en relación con la vida privada y familiar—, me quedan algunas dudas respecto del *test* de

constitucionalidad propuesto. La sentencia señala que la finalidad que se pretendió al establecer el orden de los apellidos fue dar seguridad jurídica en las relaciones familiares, pero en tanto al hacerlo el legislador privilegió la posición del varón en la familia, entonces **el fin resulta inconstitucional**, por lo que estima innecesario realizar las siguientes gradas del test (páginas 29 y 30).

Desde mi punto de vista, el fin pretendido por el legislador efectivamente es salvaguardar la seguridad jurídica –así como el derecho humano al nombre y el interés superior del menor, como bien lo precisó el Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo-, lo que encuentra buen acomodo en la Constitución Federal. Es en realidad en la instrumentación (idoneidad, relación medio-fin) de la medida en donde ya no se cumplen los extremos constitucionales, pues se utiliza una regla fija que perpetúa la situación de superioridad del hombre en la familia, cuando tal decisión debiera recaer en los progenitores, precisamente porque dicha libertad no afecta la estabilidad ni seguridad en las relaciones familiares. Por lo tanto, soy de la opinión de que el problema de inconstitucionalidad del artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal radica no en su finalidad sino en el *medio* para obtenerla, por lo que tendrían que analizarse las otras gradas del *test* de constitucionalidad, específicamente la idoneidad de la medida asumida por el legislador.

Creo que esta distinción –si bien pareciera sutil- es relevante en tanto las autoridades responsables precisamente sustentaron la defensa del artículo impugnado en el principio de seguridad jurídica, aduciendo que el legislador no tuvo la *intención* de discriminar. Es más, alguna autoridad responsable pretendió justificar la constitucionalidad de la medida legislativa en el hecho de que el artículo propiamente no

establece un orden “exclusivo” de los apellidos. De ahí que me parece que era necesario enfrentar el argumento de la autoridad con el razonamiento consistente en que, si bien podría considerarse que el propósito del legislador en la definición de las relaciones familiares es respetuoso de la Constitución Federal, ello no se consigue necesariamente mediante el orden restrictivo de los apellidos, existiendo una formulación menos lesiva del derecho a la vida privada y familiar (que sería, evidentemente, el orden indistinto). Se echa en falta esta construcción argumentativa, máxime cuando históricamente la defensa de la constitucionalidad de normas discriminatorias se ha apoyado en que éstas únicamente “retoman” o “reflejan” prácticas establecidas o tradiciones, sin existir una finalidad o intención legislativa detrás.

Tampoco comparto la implicación de la sentencia consistente en que los apellidos de los hijos futuros de la pareja, en aras de la seguridad jurídica, tendrían que asentarse en el mismo orden (página 29). Si bien pareciera que tal aseveración la realiza la Primera Sala en *obiter dicta*, haciendo alusión al derecho comparado, estimo que ello no fue materia del juicio y que tendría en todo caso que explorarse con más profundidad –y mayores argumentos- a fin de analizar si no estaríamos, nuevamente, frente a una restricción innecesaria al derecho a la vida privada y familiar.

Por las razones expuestas y con las salvedades apuntadas, comparto la decisión tomada por esta Primera Sala de declarar la inconstitucionalidad del artículo impugnado y amparar a los quejosos.

AMPARO EN REVISIÓN 208/2016
VOTO CONCURRENTE

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ GATICA

RMMG/LHOyV/debv